

PETRÓLEO

A las puertas de una nueva era

< POR JULIO OLEAS >
INVESTIGACIÓN: NICOLÁS MARCANO

Cada año nos acercamos más al fin de la era petrolera. Mantener la inercia solo hará que ese destino fatal llegue antes de tiempo y tenga efectos traumáticos para todos. El cambio de rumbo es imperativo, pero ya no puede ser hacia la apertura que en la década de los noventa del siglo pasado se vio como solución definitiva. Los vientos so-

plan en la dirección opuesta, pero las condiciones del país no alcanzan para arriesgar un bandazo de esa magnitud. En algún punto intermedio se encuentra la

mejor solución para un país que nunca ha dejado de ser productor marginal de petróleo.

2006 fue un año muy significativo para la industria petrolera. Se rompieron todos los récords de extracción de la última década, con un total de 195,6 millones de barriles, en medio de una atmósfera política enrarecida y cambios en la legislación del sector. La barrera de los 190 millones de barriles se superó en 2004, una vez que el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) estuvo plenamente operativo. Un año antes, en 2003, la producción de las empresas privadas ya fue ligeramente superior a la de Petroecuador.



En enero de 2006 la producción privada alcanzó un máximo de 378 mil barriles diarios (promedio mensual), pero los frecuentes paros en las provincias donde se concentran los yacimientos (Sucumbíos y Francisco de Orellana) frenaron el ritmo de extracción, y para diciembre se redujo a 250 mil barriles (Gráfico 1). A lo largo del año, la producción del controvertido Bloque 15 (el que operaba Occidental Petroleum Co., Oxy), ya en manos del Estado, fue reduciéndose paulatinamente, al igual que el resto de bloques a cargo de Petroecuador.

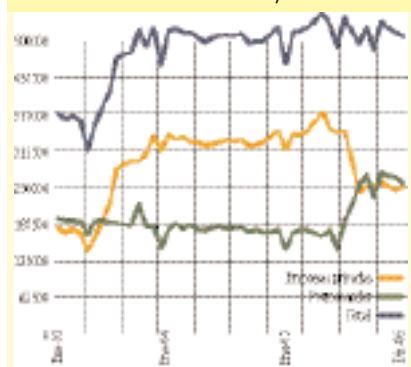
La producción de Petroecuador llegó a un mínimo de 144 mil barriles por día en marzo de 2006, pero cerró el año notablemente recuperada, con 255 mil barriles por día, gracias a la declaratoria de caducidad de la concesión de Oxy. Sin embargo, esto no bastó para que las empresas privadas sigan predominando, con un 53,8% de la extracción total (Cuadro 1).

La modificación de las participaciones en la renta petrolera determinadas por las reformas a la Ley de Hidrocarburos y la resolución administrativa que caducó el contrato de concesión de Oxy incrementaron en más de \$ 1.000 millones los ingresos petroleros del Estado. Estos datos esconden una realidad preocupante. Si el 15 de mayo de 2006 el ex ministro de Energía **Iván Rodríguez** no hubiese declarado la caducidad en contra de Oxy, Petroecuador solo habría producido 68,6 millones de barriles, volumen similar al extraído hace tres décadas, en 1976, y su participación en la producción total solo habría alcanzado a 35,1%, la más baja desde que comenzó a operar el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

LA HISTORIA DEL BLOQUE 15

La historia de la Oxy en el Bloque 15 ha sido, según **Henry Llánez**, una historia de inequidad (<http://www.congresobolivariano.org>): entre 1999 y 2004 esa transnacional aprovechó 85% del crudo extraído y dejó para el Estado el 15% restante. Con una inversión de \$

GRÁFICO 1
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO:
PROMEDIO DIARIO POR MES, 2003-2006



FUENTE: PETROECUADOR.

CUADRO 1
EXTRACCIÓN TOTAL DE CRUDO,
1997-2006

	Total		Petroecuador		Cías. privadas	
	Vol. ¹	Var. anual	Vol. ¹	% del total	Vol. ¹	% del total
97	141,7	0,9	106,7	75,3	35,0	24,7
98	137,1	-3,3	101,4	74,0	35,7	26,0
99	136,3	-0,6	89,5	65,7	46,7	34,3
00	146,2	7,3	85,0	58,2	61,2	41,8
01	148,7	1,7	82,9	55,8	65,8	44,2
02	143,3	-3,7	80,8	56,4	62,5	43,6
03	152,5	6,4	74,5	48,9	78,0	51,1
04	192,3	26,1	71,9	37,4	120,4	62,6
05	194,1	0,9	71,0	36,6	123,1	63,4
06	195,6	0,8	90,4	46,2	105,2	53,8

1. MILLONES DE BARRILES.

FUENTE: PETROECUADOR.

1.100 millones, extrajo 92,8 millones de barriles que le significaron ingresos por \$ 2.472 millones, estima Llánez, ex diputado que también fue dirigente sindical de Petroecuador.

En 1985, Oxy firmó con la estatal CEPE un contrato de prestación de servicios: para sacar el petróleo del Estado, éste le pagaba a Oxy. En 1999 el contrato fue cambiado a uno de participación: 80% para Oxy y 20% para el Estado, en un campo con reservas probadas. En noviembre de 2000 la Oxy habría transferido 40% de sus derechos y obligaciones en el Bloque 15 a favor de la canadiense Encana, sin autorización del Ministerio de Energía, conforme lo mandaba el Art. 79 de la Ley de Hidrocarburos. Esta infracción le costó, el 15 de mayo de 2006, la caducidad de su contrato, con la conse-

cuenta reversión al Estado ecuatoriano de toda la operación.

Varios grupos ambientalistas exigen que, antes de que abandone todos sus intereses en el país (es accionista del OCP), Oxy debe ser investigada por supuestos daños ambientales causados en áreas protegidas como la Reserva Biológica de Limoncocha, parte del Parque Nacional Yasuní, la Reserva Faunística de Cuyabeno y el Bosque Protector Pañacocha. Varios pueblos indígenas como los quichuas secoyas, shuar y achuar habrían sido afectados por las actividades de esta petrolera, según la controvertida Acción Ecológica.

Así, tras un paréntesis de casi seis años, la tercera semana de mayo de 2006 el Estado se hizo cargo –nuevamente– del Bloque 15, uno de sus más ricos yacimientos. En poder de la transnacional, la producción del Bloque 15 oscilaba alrededor de 100 mil barriles diarios, cifra que fue disminuyendo paulatinamente durante el resto del año, hasta fluctuar alrededor de los 80 mil barriles diarios. Para sostener la producción, Oxy había programado perforar nuevos pozos, pero la unidad especial que se hizo cargo no continuó el programa de inversiones.

Con casi un año de retraso, en este mes se iniciarán las inversiones que Oxy había previsto comenzar en 2006. La unidad especial ha proyectado para 2007 una producción de 32 millones de barriles (87.671 barriles por día), lo que reeditaría ingresos por \$ 1.600 millones, solo si puede cumplir un presupuesto de gastos de \$ 497 millones. ¿Qué es mejor para el Bloque 15 (es decir, para el país): extraer al ritmo que extraía Oxy o al que ha programado Petroecuador? La respuesta solo podrá saberse luego de una auditoría técnica especializada.

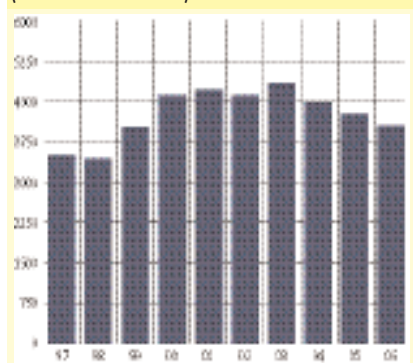
Mientras tanto, el Procurador General del Estado, **Xavier Garaicoa**, ha ratificado que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) no tiene ni jurisdicción ni competencia para conocer el reclamo de la Oxy; que no proceden las medidas cautelares pues-

tas por la demandante, pues no existe confiscación de bienes, y que será la Procuraduría General la que conducirá la defensa del país y no estudios jurídicos contratados, como ocurría en el pasado.

¿CUÁNTO TIEMPO QUEDA?

Desde 1972, Ecuador se percibe a sí mismo como un país petrolero. El tiempo que le reste como tal dependerá, básicamente, de dos factores: del volumen de sus reservas y del ritmo de extracción. Hace cuatro años, **César Cordero**, del Foro de Opinión Petrolera (Fopec), estimaba que las reservas probadas remanentes de petróleo eran de 3.700 millones de barriles, y no de 4.487 millones, como afirmaban las autoridades del sector. El *CIA World Factbook* estimó que en 2005 el Ecuador tenía 4.512 millones de barriles de reservas comprobadas (<http://www.indexmundi.com/es>). El *OPEC Annual Statistical Bulletin* (2005) valoró que en 2004 las reservas eran de 4.447 millones de barriles (*Gráfico 2*).

GRÁFICO 2
RESERVAS PROBADAS DE PETRÓLEO
(MILLONES DE BARRILES)



FUENTES: FOPEC Y THE OPEC ANNUAL STATISTICAL BULLETIN, 2005.

¿Quién dice la verdad? Entre 1972 y 2003 el país explotó 3.181 millones de barriles de petróleo, equivalentes a 47% de sus reservas probadas totales, pero poco ha hecho por compensarlas. Si no se incorporan nuevos yacimientos, en ocho años más Ecuador dejaría de exportar petróleo y para 2026 habría agotado todos sus yacimientos probados, si el ritmo de extracción se mantiene en los 195 millones de barriles de 2006.

El ministro de Energía **Alberto Acosta** es partidario de una explotación técnica, a un ritmo de extracción que no ponga en peligro los yacimientos. El volumen de reservas no es un *stock* necesariamente decreciente: puede incrementarse si se dinamizan las actividades de prospección y exploración, que siempre revisten alto riesgo.

Este es uno de los puntos más sensibles de la futura política petrolera. En las próximas licitaciones, ¿es conveniente poner en la misma cesta campos situados junto al Océano Pacífico y campos situados en la cuenca amazónica? ¿Hasta cuándo se aplazará la expansión de la frontera petrolera hacia el suroriente? ¿Se incluirá el campo Ishpingo-Tiputini-Tambococha (ITT), con 960 millones de barriles de reservas probadas de crudo pesado?

Desde el 30 de marzo corre el plazo que el presidente Rafael Correa dio al ministro Acosta y al presidente ejecutivo de Petroecuador **Carlos Pareja Yanuzelli** para que se pongan de acuerdo en una de cuatro alternativas sobre el ITT: 1) dejar el crudo represado en el subsuelo sin explotar, posición de Acosta, siempre y cuando la comunidad internacional entregue al menos la mitad de los recursos que se generarían por la explotación de ese crudo; 2) explotar el campo por Petroecuador; 3) explotarlo por “empresas consideradas como estatales”, posición de Pareja, para lo que se cuenta con una propuesta del consorcio Sinopec-Enap-Petrobras, de China, Chile y Brasil respectivamente, y 4) que se convoque a una licitación internacional de empresas estatales de probada capacidad técnica y económica.

‘DOWNSTREAM’ EL PROBLEMA ES MÁS GRAVE

En los últimos siete años la producción de las refinerías nacionales ha crecido menos de 1% por año. En 2006 alcanzó los 62,9 millones de barriles (*Cuadro 2*). Este es un típico ejemplo de lo que los economistas, y el mismo Alberto Acosta desde hace más de una década, llaman “reprimarización de la economía”, provocada por el modelo de apertura ne-

liberal que otorga prioridad a las exportaciones de productos primarios y resta importancia a la generación de valor agregado en la industria nacional.

El problema está en que el crecimiento de la demanda interna de derivados triplica la producción nacional y, como van las cosas, cada año se importa más, y más caro. Ecuador tiene tres refinerías: Esmeraldas (con capacidad para 110.000 barriles por día), La Libertad (46.000 barriles por día) y Campo Industrial Shushufindi (20.000 barriles por día). Además, en Lago Agrio opera una planta con capacidad de 1.000 barriles por día y en Shushufindi otra de gas licuado, que produce menos de una décima parte de la demanda interna. Otras cuatro pequeñas refinerías atienden a los campos petroleros (Tarapoa, Oxy, Repsol-YPF y Villano).

En 2006 las refinerías estatales sufrieron 175 interrupciones, de las cuales solo cuatro fueron programadas. Esto redujo la capacidad de producción de derivados y exacerbó la necesidad de importar combustibles. Buena parte de la infraestructura está deteriorada y ya es obsoleta, lo que resulta más grave si se toma en cuenta que el crudo por refinar cada vez es más pesado. Más todavía, los ductos de producción y secundarios se rompen con frecuencia, por falta de reposición, corrosión y también por sabotajes.

Los bajos precios de venta interna de los derivados incrementan innecesariamente el consumo interno de combustibles y estimulan el contrabando, lo que tiene un severo impacto en la posición financiera de Petroe-

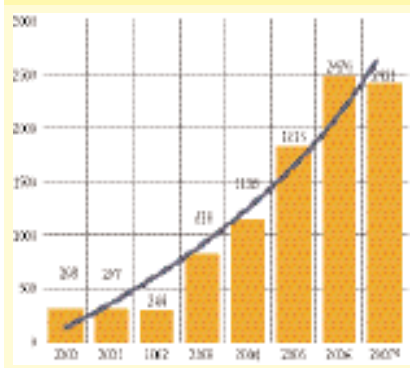
CUADRO 2
PRODUCCIÓN NACIONAL DE DERIVADOS
DE PETRÓLEO
(MILES DE BARRILES)

	Total	Fuel Oil	Residuo -1	Diesel N.2	Gasolina extra	GLP	Otros
2000	58.940	10.787		12.080	10.226	2.818	6.142
2001	56.809	10.953	11.898	13.450	10.837	2.407	7.263
2002	58.769	11.354	10.741	11.979	10.163	2.060	12.472
2003	55.817	10.812	8.879	10.961	10.028	2.229	12.908
2004	59.714	10.307	10.012	11.902	10.312	2.184	14.997
2005	61.620	10.439	10.474	12.458	10.628	2.119	15.502
2006	62.901	9.809	11.784	12.055	11.354	2.113	15.786

FUENTE: PETROECUADOR.

cuador y, por ende, en el equilibrio fiscal del país. Entre 2000 y 2006 el valor de las importaciones (CIF) de derivados se multiplicó por 8,3 veces (Gráfico 3). Conservadoramente, Petroecuador ha estimado que en 2007 deberá gastar \$ 2.411 millones en importaciones para satisfacer la demanda interna.

GRÁFICO 3
IMPORTACIONES DE DERIVADOS DE
PETRÓLEO, 2000-2007
(MILLONES US\$ CIF)



* ESTIMACIÓN DE PETROECUADOR.
FUENTE: PETROECUADOR Y BCE.

El manejo político de los precios internos, la descapitalización de las plantas de refinación y la tendencia mundial del mercado petrolero han conducido al país a un callejón sin salida: paradójicamente, mientras más valor de crudo se exporta, más cuesta importar derivados para consumirlos a precios subsidiados, en beneficio de quienes más pueden gastar y de poderosas redes de contrabandistas.

¿MÁS O MENOS RIESGO?

En la actividad petrolera se necesita arriesgar mucho dinero si se quiere tener altos beneficios. En el extremo, se puede perforar y perforar, y no sacar nada. Ningún país en el mundo asume por sí solo un riesgo tan grande y, para minimizarlo, se invita a la empresa privada a compartir los albueros de la exploración, a cambio de las ganancias si todo sale bien. Definir un marco contractual beneficioso para todos los involucrados sería la clave del negocio.

Una vez superado el riesgo inicial, la operación sigue siendo riesgosa. Los

RECUADRO 1

CAMPOS MARGINALES: ¿EL PERRO DEL HORTELANO? ENTREVISTA A IVÁN BEDOYA GERENTE TÉCNICO DE DYGOIL

Según la legislación ecuatoriana, campo marginal es el que tiene una producción de hasta 1% del total nacional; si se produce 500 mil barriles diarios, los marginales son los que producen hasta 5.000. En septiembre pasado las autoridades licitaron ocho de estos campos.

Una de las empresas interesadas fue Dygoil, asociada con cuatro firmas venezolanas que pujaron como Consorcio Petrolero Amazónico, comenta para *GESTIÓN* Iván Bedoya. "Presentamos siete ofertas para los ocho campos y ocupamos el primer lugar. Esto no significa que hayamos ganado, porque de acuerdo a las normas podíamos recibir hasta tres campos". El proceso fue limpio, "todo se hizo de manera pública, en presencia de la prensa escrita y televisiva, sin embargo el cambio de gobierno lo interrumpió" y la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) ha considerado que mejor sería declararlo desierto, "insinuación fundamentada en que en las sesiones 311 y 313 del Comité Especial de Licitaciones (CEL) no hubo el quórum reglamentario", dice Bedoya y continúa precisado que "en estas sesiones no estuvieron presentes los tres miembros del CEL, pero estuvieron dos; un quórum normalmente se constituye por la mitad más uno de los miembros colegiados, y en este caso con dos era suficiente".

Desde la visión de los ganadores del proceso, si no se concretara la licitación, el país perdería inversiones por unos \$ 250 millones, "porque, si bien se puede reabrir la licitación, lo que tomará más de un año, las compañías que ya participaron posiblemente ya no lo harán por falta de seguridad jurídica", advierte Bedoya.

Las autoridades del nuevo gobierno están urgidas por invertir y reactivar la producción. "Nuestras ofertas contemplan hasta un 85% de participación para el Estado, lo que constituye un hecho inédito. Todos los contratos firmados por el país no llegan a 60% de participación estatal. Consideramos que con un margen de 15% para la empresa, el negocio sigue siendo muy rentable", afirma el gerente técnico de Dygoil. "Esto significa que las empresas, en su mayoría extranjeras, están haciendo un gran negocio y nosotros no tenemos las mismas opciones, a pesar de que las autoridades han dicho que los campos marginales ayudarían a desarrollar a la empresa nacional, como ocurre en Argentina, Perú y Venezuela".

La figura de riesgo compartido "solo puede darse si las reglas del juego son claras; si el Estado quiere mayor participación, también debe asumir más riesgo, lo contrario no sería justo para el inversionista", dice Bedoya, representante de una empresa nacional pionera en alianzas operativas de prestación de servicios. En 2001, Petroproducción contrató con Dygoil trabajos que fueron financiados con el incremento de la producción lograda. "Nos ocupamos del campo Víctor Hugo Ruales -en el extremo norte del Oriente- y logramos incrementar en seis veces la producción de crudo. Más aún, los indicios de una producción sostenida conservando la presión del yacimiento indicaron que la estructura era más grande de lo que se había pensado. Hicimos inversiones adicionales en sísmica y perforamos dos pozos más. Establecimos nuevas reservas por 28 millones de barriles y otros 80 millones probables. Gracias a nuestro trabajo ahora esos campos pueden producir 15.000 barriles diarios. Nuestras aspiraciones en los campos marginales tienen el aval de éxitos ya probados", concluye.



Verónica Valencia

RECUADRO 2

ENTRA TERPEL, SALE TEXACO

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE ORGANIZACIÓN TERPEL AMAURY DE LA ESPRIELLA MARTÍNEZ

Pese al compás de espera que siempre ocurre en un cambio de gobierno, el petrolero es un sector muy dinámico. La empresa colombiana Terpel decidió hace poco incursionar en el mercado de combustibles ecuatoriano, tomando a su cargo los servicios que venían siendo prestados bajo la conocida estrella de Texaco. "Ya estamos en todas las provincias del país, tenemos 65 estaciones de servicio de las cuales la mayoría están en Guayas y en Pichincha, pero nuestra fortaleza se basa en no concentrarnos en las ciudades", comenta para GESTIÓN Amaury de la Espriella, presidente de Terpel. "En Colombia tenemos estaciones en zonas urbanas, rurales y en troncales; ofrecemos una gran red y suministramos combustibles sin que el empresario de transporte deba estar pendiente de entregar dinero a quienes manejan los vehículos; el vehículo llega a la estación, tanquea y posteriormente nosotros enviamos la cuenta directamente a la flota", dice Espriella. "Allá somos la marca con más estaciones (unas 1.300), nuestro objetivo es extender esta red al Ecuador".

Terpel planea invertir unos \$ 10 millones en 2007, de los cuales \$ 2 millones se destinarán al cambio de imagen de las estaciones, "es decir bajar la bandera anterior y montar la nueva, con nuestros colores; el resto lo vamos a destinar a incorporar ocho nuevas estaciones", anticipa Espriella. "Creemos que el Gobierno ecuatoriano tiene buenas intenciones; pensamos que las instituciones se van a fortalecer; somos latinoamericanos, nuestros países atraviesan situaciones similares y hemos podido salir adelante. Hemos hecho una apuesta que no consideramos riesgosa, sino de muchos retos. En Colombia desarrollamos varios programas exitosos, como el denominado 'Exacto Confianza'. Queremos darle al consumidor la tranquilidad y la confianza de que cuando se acerque a una estación de Terpel ésta le entregará la medida exacta de combustible y con la calidad requerida. Nuestro programa 'Excelencia' entrega al distribuidor herramientas para el buen manejo de su estación -desde cómo hacer un buen presupuesto o programas de calibración de todos los equipos hasta mantenimiento preventivo. Tenemos un programa de escuela de isleros, con capacitación de cómo darle uso al combustible, responder a las inquietudes del consumidor y dar la bienvenida a la estación. Nos ha traído muy buenos resultados, el islero es quien da la cara de la empresa", dice.

Terpel es una empresa colombiana líder en distribución de combustibles. Espriella afirma orgulloso que han superado a multinacionales como Exxon-Mobil. "Cualquier crecimiento adicional ya era muy difícil, nuestra participación de mercado ya es de 37%, así que empezamos a buscar nuevas oportunidades de negocio. En julio de 2006 llegamos a Ecuador y comenzamos a tramitar los permisos de cambios de bandera, de la antigua Chevron a la bandera Terpel. Hace mes y medio adquirimos en Panamá 53 estaciones de la marca Axel. Ahora ya tenemos un mercado mucho más amplio, con un crecimiento potencial muy importante. Para dar un ejemplo, en Ecuador el crecimiento del parque automotor fue de 10%. De partida, en Panamá tenemos una participación de mercado de 12% y en Ecuador de 8%. Creemos que nuestras estrategias nos dan muchas fortalezas, que ya impulsamos en Colombia", afirma optimista Espriella.



paros provocados por las comunidades para reclamar perjuicios ambientales y sociales, los impulsados por partidos políticos enquistados en gobiernos seccionales, ávidos por captar recursos para satisfacer sus aspiraciones, los sabotajes y el terrorismo son problemas que debería solucionar el Estado. Pero la limitada soberanía ejercida en las apartadas zonas de producción desvía las presiones sociales hacia las empresas petroleras —estatales y privadas— que deben asimilar en sus costos de producción parte de la crisis ecuatoriana.

Y aunque este segundo riesgo también se hubiese disipado, persiste el riesgo de desabastecimiento. El petróleo y

sus derivados son factores clave para la producción, el transporte y el consumo de bienes y servicios. Su carencia, o su abastecimiento defectuoso, irrogaría grave riesgo para el desarrollo nacional.

Para minimizar estos riesgos es necesario redefinir dos factores. En el *upstream*, es decir en las fases de exploración y explotación, la titularidad del recurso y las formas de participación de la empresa privada requieren un nuevo estatuto constitucional, explícito y suficiente para evitar perjuicios al Estado y para alentar la inversión en exploración y tecnología. Toda ecuación productiva debe considerar precio y volumen: cuando los

precios internacionales del crudo son bajos, la inversión de riesgo requiere compensaciones; si los precios suben, el Estado se ve impelido a satisfacer las demandas sociales y los inversionistas a recibir ganancias adicionales por su actividad empresarial.

En el *downstream*, o sea en las fases de refinación y comercialización, siempre es riesgoso depender de pocas empresas, peor de una sola, aunque la tendencia reciente en la región ha sido más bien a concentrar los procesos críticos en manos del Estado. Aparentemente, aunque siempre repugnó a los reformadores neoliberales el adjetivo de “sector estratégico” que tuvo el petrolero en la era de la industrialización sustitutiva, este sector nunca ha dejado de serlo. Y de esto se han aprovechado hasta la contumacia los *brokers* comercializadores de crudo y derivados, y empresas de comercialización interna de gas licuado de petróleo. La débil capacidad reguladora del Estado, consecuencia de su reducción acrítica, inconsculta, ha hecho más jugoso el festín para sus beneficiarios ocultos.

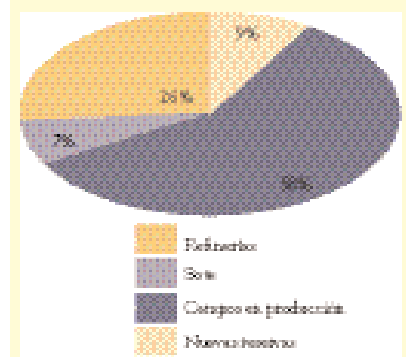
2007 YA ESTÁ JUGADO

En este año, con un presupuesto de más de \$ 4.500 millones, Petroecuador espera producir en sus campos unos 62,6 millones de barriles, es decir 175 mil barriles por día; perforar 24 pozos mediante alianzas operativas; reacondicionar otros 360 pozos; transportar por el SOTE unos 365 mil barriles diarios; y procesar en sus refinерías 57,5 millones de barriles (36,1 millones en Esmeraldas, 14,8 millones en La Libertad y 6,6 millones en la refinерía de Shushufindi).

Las inversiones de este año bordearán los \$ 457 millones, básicamente para mantener la producción de campo, pues solo \$ 40 millones se destinarán a tratar de incorporar nuevas reservas, por 65 millones de barriles, de los cuales 35 millones son de reservas probadas y otros 30 millones de reservas probables (Gráfico 4).

Si bien se refinarán 57,5 millones de barriles, la oferta de derivados llegará a 65,7 millones, que incluirán 1,42 millones de barriles de naftas para exportación,

GRÁFICO 4
INVERSIONES DE PETROECUADOR, 2007
(COMO PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN PRESUPUESTADA TOTAL)



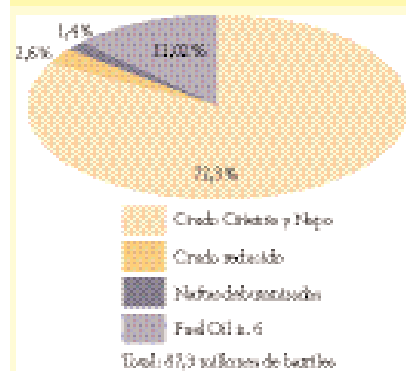
FUENTE: PETROECUADOR.

1,82 millones de barriles de gasolina extra que se preparará en Pascuales y otros 3,2 millones de barriles que se mezclarán en El Beaterio, pues el estado actual de las refinерías estatales obliga a importar naftas de alto octanaje para mezclarlas con el producto nacional.

Petroecuador espera exportar 75 millones de barriles de crudo, que, a un promedio de \$ 50 por barril, le significarán ingresos por \$ 3.750 millones (Gráfico 5). Además exportará 12,4 millones de barriles de naftas debutanizadas y fuel oil N° 6.

Pero como sus refinерías no abastecen al consumo interno (incluido el contrabando), también deberá importar unos 29 millones de barriles de derivados como diesel, gas licuado de petróleo y naftas de alto octanaje, por un valor

GRÁFICO 5
EXPORTACIONES PROGRAMADAS POR PETROECUADOR, 2007
(COMO PORCENTAJE DEL VOLUMEN TOTAL)

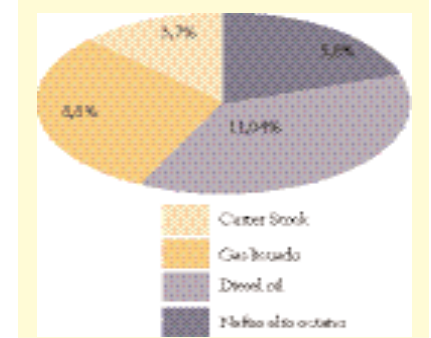


FUENTE: PETROECUADOR.

estimado de \$ 2.358 millones, lo que representa más de 50% de su presupuesto operativo para 2007 (Gráfico 6).

Es imposible cambiar en pocos días el rumbo de un transatlántico de la envergadura de Petroecuador, como lo prueba el presupuesto aprobado para 2007. Pero hay indicios de que las cosas pueden mejorar, incluso a partir de temas micro. Así, 35% de la gasolina extra que se expondrá en Guayaquil tendrá un 5% de etanol, lo que contribuirá a mejorar la calidad del ambiente y a reducir la presión de la demanda. Las negociaciones directas, de gobierno

GRÁFICO 6
IMPORTACIONES PROGRAMADAS POR PETROECUADOR, 2007
(COMO PORCENTAJE DEL VOLUMEN TOTAL)



FUENTE: PETROECUADOR.

a gobierno, para el aprovisionamiento de diesel y gasolinas le significarán al país ingentes ahorros que antes eran capturados por los famosos *brokers*. Incluso las reparaciones de la infraestructura hidroeléctrica de Paute, que se hicieron con el riesgo de sufrir apagones que hubieran perjudicado la imagen de un gobierno entrante, muestran que es posible un cambio de rumbo en la administración del sector público.

TIEMPO DE UN NUEVO MODELO PETROLERO

¿Qué debe hacer el país con una empresa que en 2006 exportó petróleo crudo por más de \$ 3.600 millones y otros \$ 610 millones en derivados, o sea 34% del total de las exportaciones ecuatorianas; que contrata seguros por más de \$ 4.000 millones para reducir los múltiples riesgos de su operación; que debe ges-

RECUADRO 3

FRENTE DE DEFENSA DE LA AMAZONÍA VS. CHEVRON-TEXACO: MUCHO MÁS QUE UN JUICIO EN NUEVA LOJA

Hace un par de siglos, Pierre-Joseph Proudhon dijo que "la justicia no es, de ningún modo, obra de la ley". Lo dijo para reforzar su feroz crítica a la propiedad privada, punto de escisión entre el socialismo y el anarquismo decimonónico. Esa máxima puede servir ahora para describir la disputa entre el Frente de Defensa de la Amazonía y Chevron-Texaco. El primero afirma que la transnacional petrolera habría cometido el peor crimen ecológico en la concesión —alrededor de 1 millón de hectáreas— que explotó entre 1964

y 1990 en el Oriente ecuatoriano, con grave perjuicio para la vida y el entorno de alrededor de 30.000 personas a las que dice representar. La compañía replica que procedió conforme lo exigían las técnicas de la época, que remedió todo lo que le competía y que, por ello, el Estado ecuatoriano ya se dio por satisfecho.

Según la legislación ecuatoriana, las riquezas del subsuelo son del Estado, pero puede darlas en concesión a la empresa privada para explotarlas en beneficio mutuo; las riquezas del suelo son de las personas (naturales y ficticias), pero para considerarse propietarias deben registrar su derecho. En la mencionada concesión, la alianza Cepe-Texaco explotó un recurso del Estado (el petróleo) en un suelo de ... ¿el Estado?, ¿de las comunidades indígenas?, ¿de los colonos (qué colonos)?

Las actividades petroleras siempre traen consecuencias —siempre dejan su 'huella ecológica', dicen los expertos— y, antes de que se despierten las alarmas mundiales sobre estas y otros problemas étnicos, era muy frecuente que las empresas optaran por reducir sus costos operativos reduciendo sus costos de tratamiento y remediación, para maximizar sus beneficios a costa del ambiente. Y en ese ambiente, cuando ocurrió la operación Cepe-Texaco, vivían indígenas y colonos sin títulos de propiedad o, en el mejor de los casos, con títulos precarios, que los colocaban en una posición política y social asimétrica, respecto del resto de ecuatorianos, del Estado y, por supuesto, de Texaco.

Dieciséis años más tarde, la 'huella eco-

lógica' del consorcio Cepe-Texaco (los acusadores afirman que la responsable solo es Texaco, pues era esa empresa la que debía proponer y ejecutar la tecnología de explotación) continúa debatiéndose en un juzgado de lo civil de esa región de frontera que sigue siendo el Oriente ecuatoriano. Para los acusados no es posible determinar científicamente causalidad entre las consecuencias de las actividades petroleras y la incidencia de enfermedades mortales, lo único demostrable es correlación estadística. Con bases de información diferentes a las utilizadas por los acusadores, afirman que en los lugares supuestamente afectados no se ha dado una mayor incidencia de enfermedades mortales. Los acusadores, exhaustos por los gastos del proceso, quieren acortar la etapa pericial y pasar a la siguiente fase, lo que es impugnado por los acusados, que quieren el cumplimiento de todos los peritajes, lo que dilatará el proceso en su beneficio. Los acusadores quieren salpimentar el trámite judicial con factores políticos; los acusados consideran que todo el proceso es bochornoso.

De todo esto difícilmente surgirá un fallo justo. Lo que se debate judicialmente es mucho más que la millonaria indemnización pretendida por el Frente de Defensa de la Amazonía. En el fondo, se debate la permisiva negligencia de una sociedad acostumbrada a medrar de las rentas del petróleo sin importarle las consecuencias ambientales dejadas al paso; se debate la penosa condición humana de las comunidades vecinas a los pozos de extracción de una de las riquezas más preciadas por la civilización mundial; y también se debate la responsabilidad social de una transnacional con una profunda huella ecológica, aquí y en todo el mundo. Pero todos estos factores no son parte del proceso.

tionar reservas probadas de crudo superiores a los 4.000 millones de barriles (unos \$ 216.000 millones, a precios de 2006); que tiene una nómina de 4.300 empleados de los cuales más de 1.000 serían redundantes; que desde hace 12 años no puede definir por sí misma su programa de inversiones; que, por responsabilidades propias y ajenas, ha permitido que a sus refinerías poco les falte

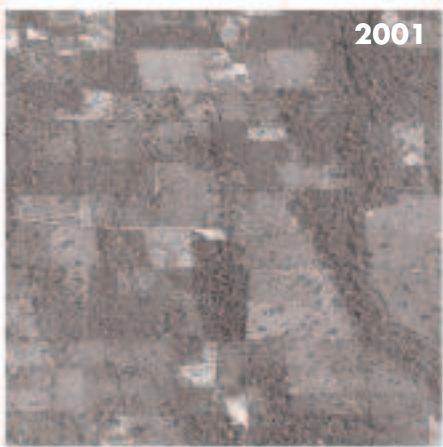
para convertirse en latas reciclables; que tiene uno de los sindicatos públicos más poderosos y mejor tratados del país; que es el más peligroso factor de daño ambiental del sector productivo; que auspicia con su logo más de 100 estaciones de servicio en todo el territorio nacional; y que, en fin, canaliza a la cuenta única del tesoro nacional casi 25% de los ingresos totales del gobierno central?



1975

Wkt: Sacna 53
12/1975 #235
Aerial Photograph by
Instituto Geográfico Militar - Quito, Ecuador

0 125 250 500 Meters



2001

Wkt: Sacna 53
3/1/2001 #13205
Aerial Photograph by
Instituto Geográfico Militar - Quito, Ecuador

0 125 250 500 Meters

Petroecuador es, de lejos, la más importante empresa del país; de hecho, es una de las más importantes de Sudamérica, si se comparan niveles de ventas. Pero no se puede desconocer que se encuentra sumida en la más profunda crisis que recuerda su ya larga y controversial historia, desde la época de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (Cepe), miembro del único cartel exitoso de *commodities* del mundo,

la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep). Al menos sus niveles de producción, sus inversiones y su capacidad de refinación de los últimos años indican una severa crisis, maquiada tras una espesa capa de precios mundiales altos, que al mismo tiempo ha permitido financiar subsidios regresivos y distorsionantes.

Los huracanados vientos originados en Venezuela y Bolivia están marcando

un cambio en el sector petrolero latinoamericano. La mexicana Pemex, hoy más que nunca, quiere tener pleno control sobre sus recursos. Como hace poco declaró sumariamente un alto funcionario mexicano, ese país no está dispuesto a ceder un negocio cuyo costo de producción es de \$ 3 por barril y cuyo precio de mercado supera los \$ 60 por barril. En el extremo sur de la subregión, la chilena Enap, empresa

RECUADRO 4

EMERGENCIA PERMANENTE EN PETROECUADOR

GALO CHIRIBOGA,
EX PRESIDENTE DE PETROECUADOR

Petroecuador es una empresa pública cruzada por intereses privados que toman cuerpo cuando se contrata proveedores y se abren licitaciones. “Eso no está mal, el problema es que muchas veces esos sectores no permiten mayor apertura a otras opciones; si alguien quiere ofertar o presentarse a una licitación, debe pasar por un largo proceso de calificación. Al final del día, esto produce la exclusión de otras empresas. Si hubiera mayor oferta de bienes y servicios, sin duda los efectos en los resultados de Petroecuador serían positivos”, comenta Galo Chiriboga, ex presidente de Petroecuador.

Existen grupos de poder que pretenden ser los beneficiarios excluyentes del sistema. “La empresa más grande del país tiene un sistema administrativo muy complicado; muchas veces las decisiones pasan por los vicepresidentes de las filiales y suben al Consejo de Administración. Lamentablemente, éste no es un órgano eficiente, lo que entorpece los procesos de contratación, que fácilmente demoran seis o siete meses cuando no terminan fallidos por cuestiones técnicas o de procedimiento”, dice Chiriboga. “Varias administraciones han usado y abusado de la facultad legal de declarar la emergencia y luego proceder a contratar. No puedo afirmar que las contrataciones bajo este régimen hayan sido ‘a dedo’ —se hacen por concursos, etc.—, pero muchas veces se observa que la emergencia no se justifica. Ejemplo: hace meses se quería comprar una bomba y se declaró la emergen-

cia; pero si se sabía que había que comprarla, simplemente se lo debió programar para no llegar al momento límite en el cual se imponía presionar a las autoridades y a la administración para declarar la emergencia. Esto también debe regularse; la emergencia debe ser lo excepcional, cuando muchas veces en Petroecuador es lo común”.

De todas maneras, hay proyectos fundamentales. “La mejora de la capacidad técnica de la refinería de Esmeraldas, por ejemplo, pues esa planta fue concebida para refinar crudos livianos, pero actualmente depura crudos pesados. Esto ha deteriorado toda la infraestructura. Según conozco, la licitación que dejamos iniciada no ha avanzado como se esperaba, debido a que no se ha presentado el número de ofertas necesario. Dados los altos precios del petróleo, se están haciendo refinerías en todo el mundo. El país necesita otra refinería más moderna y, en mi opinión, el gobierno está avanzando en la dirección correcta”, dice el ex funcionario de la estatal petrolera.

Para dejar de pagar \$ 42 millones anuales por almacenar gas licuado en barcos, Chiriboga abrió otra licitación. “El costo sería de \$ 96 millones, lo que quiere decir que en dos años y medio se habría pagado la inversión. Lo que llama la atención es que han pasado treinta años y no se ha decidido algo tan conveniente para el país. Obviamente, en este negocio hay intereses ocultos”, comenta.

El crecimiento de la demanda de combustibles se explica “fundamentalmente por el contrabando y por el uso inadecuado que dan varios sectores a estos recursos. Solo está subsidiado el gas de uso doméstico, sin embargo se lo utiliza en la industria hotelera, en la industria avícola... Se requiere definición política para mantener o focalizar estos subsidios. El tema más complejo es la fuga de combustibles a través de las playas. Para contrarrestarla es necesario un gran esfuerzo con aduanas y controles marítimos”.

Chiriboga sostiene que Petroecuador “debe ser una empresa nacional con visión y presencia internacional más grandes. Por ahora es una petrolera muy local; creo que debe abrirse al mundo en asociación con otras estatales o privadas. Existe una propuesta de la estatal chilena ENAP para explorar gas en Magallanes, lo que representa una buena oportunidad”, concluye.

Regelto Aguiar




ciento por ciento estatal –de un país considerado ejemplar por su apertura al mercado–, decidió en 2004 fusionar la almacenadora de combustibles Emalco con Enap Refinerías SA; antes ya había fusionado las refinerías Aconcagua y Bio Bio (que hasta diciembre de 2003 operaban como sociedades anónimas independientes). Mientras en Chile (con empresa estatal de petróleo) se exporta valor agregado, en Argentina (sin empresa estatal de petróleo) las empresas privadas exportan crudo.



LOS CORRECTIVOS PARA PETROECUADOR SON TAN URGENTES QUE NO SE DEBE ESPERAR A LA CONSTITUYENTE, AUNQUE SEA DIFÍCIL CAMBIAR DE RUMBO AL TRANSATLÁNTICO.



Desde que la Cepe cambió a Petroecuador, sus presupuestos fueron controlados por el Ministro de Finanzas y se redefinieron las modalidades de contratación, parece que el país perdió la brújula para su más importante recurso natural. Para unos, los males de Petroecuador son constitucionales a su matriz de origen, el sector público. Para otros, abandonarla al mercado sería como soltar la gallina de los huevos de oro en un patio plagado de lobos. En algún lugar entre estas dos visiones extremas se encuentra el punto de equilibrio institucional de esta actividad, cuyos problemas son más amplios y graves que los imputables a la empresa estatal. Los correctivos necesarios, globales y específicos, son suficientemente urgentes como para no esperar a la asamblea constituyente, pero deben ser lo justamente prudentes como para encaminar el transatlántico por la ruta que imponen los tiempos. 

LAS EMPRESAS EUROPEAS: APUESTAN POR LATINOAMÉRICA PESE A LOS RIESGOS

Las inversiones españolas en la región representan cerca de 40%

Por J. Sérvulo González*

A las empresas europeas les atrae más el potencial de los países latinoamericanos que los riesgos macroeconómicos de la zona, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). España lidera las inversiones en la zona, con cerca de 40% del total. Las empresas europeas que invierten en Latinoamérica y el Caribe asumen los riesgos macroeconómicos, regulatorios e institucionales y los consideran “inherentes” a la región, según un informe presentado por el BID. El representante especial del BID en Europa, **Carlo Binetti**, explicó que actualmente “el entorno es más estable y menos volátil. En la región se dan las circunstancias para seguir creciendo”.

Pero aún existen algunos obstáculos. Las empresas europeas señalan a Argentina y Venezuela como los países del área que presentan más obstáculos regulatorios e institucionales. No obstante, el estudio aclara que estos casos no son extrapolables al resto de países de América Latina.


Binetti apuntó cómo las reformas estructurales emprendidas por los países latinoamericanos en la década de los noventa han servido para el fortalecimiento de las instituciones, para entrar en un mercado de libre comercio y para establecer un sistema bancario y financiero más solvente.

El representante del BID destacó que las remesas de los inmigrantes han alcanzado \$45.000 millones, lo que supone “un caudal de recursos que se han constituido como una fuente muy importante”.

Por su parte, **Emilio Ontiveros**, consejero delegado de Analistas Financieros Internacionales (AFI), grupo que elaboró el estudio, explicó que las inversiones

extranjeras fortalecen las economías, son como el “colesterol bueno”.

Europa es el principal inversor en América Latina y el Caribe, según Ontiveros. A finales de los noventa, cuando la inversión extranjera en la región alcanzaba su máximo, 62.000 millones de dólares, el esfuerzo europeo representaba 63% del total. Además, España lidera la clasificación de las inversiones extranjeras directas (IDE) en Latinoamérica, con cerca de 40% del total, estima Ontiveros.

La percepción de los inversores ha hecho la región “más volátil y más sensible ante los espasmos del mercado de capitales”, explica el ejecutivo de AFI. No obstante, “la capacidad de superar perturbaciones políticas sin menoscabar la estabilidad macroeconómica y asegurar el control de la inflación” es el síntoma más firme de recuperación de la credibilidad de la zona. Ontiveros explicó que “muchas empresas asumen estos riesgos propios de las IDE y las integran en sus sistemas de decisión, son los riesgos que arrastra la región”. 

* El País, Madrid. Reproducido con autorización.

